

GRECIA

COMENTARIO GENERAL

Situación política, económica y social

Las políticas de austeridad impuestas por los acreedores para salir de la crisis y el problema de los refugiados siguen siendo los temas dominantes en el panorama político y social griego.

A finales de mes, Grecia y los acreedores interrumpieron las negociaciones sobre el programa de medidas que acompañan al rescate, sin visos de que se pudiera celebrar antes de mayo una reunión extraordinaria del Eurogrupo para dar luz verde al desembolso de nuevas ayudas.

Grecia y los acreedores han llegado nuevamente a un punto muerto en sus negociaciones ante la incapacidad de lograr un acuerdo sobre el paquete adicional de medidas “preventivas” exigidas por los socios. Tras la interrupción de las negociaciones a nivel técnico, el primer ministro griego, Alexis Tsipras tomó la decisión de pedir una cumbre extraordinaria para “garantizar el cumplimiento del acuerdo sobre el tercer rescate” firmado en julio pasado.

El rescate tan solo prevé medidas por valor de 5.400 millones de euros, lo que corresponde al 3 % del PIB, a cumplir de aquí al año 2018 con vistas a garantizar el citado superávit primario.

Entre las medidas, sobre las que según fuentes gubernamentales ya se alcanzó un acuerdo con los acreedores, figuran las controvertidas reformas fiscal y de pensiones, la privatización de bienes públicos y la venta de la cartera de créditos morosos de la banca griega a los denominados fondos “buitre”.

Lo que no estaba previsto eran medidas adicionales como las exigidas posteriormente, sobre todo por presión del Fondo Monetario Internacional (FMI), que duda de que Grecia pueda alcanzar con el programa actual un superávit primario del 3,5 % en 2018.

El Gobierno de Atenas contestó a esa proyección negativa recalcando que a diferencia de las previsiones fiscales del FMI, que partía de un déficit primario del 0,6 % para 2015, Grecia alcanzó finalmente un superávit primario del 0,7 % del PIB. Este resultado supera además con creces el objetivo de un déficit del 0,25 % fijado en el tercer rescate.

En declaraciones a la televisión pública ERT, el ministro de Trabajo, Yorgos Katrúgalos, reprochó al FMI haber dilatado expresamente las negociaciones con el objetivo de “imponer su propio programa y no el acuerdo del pasado verano”. A su vez, la parte griega consideró que la insistencia de Schäuble de incluir al FMI en el tercer rescate (el Fondo todavía no ha decidido sobre su participación) obedece únicamente a fines políticos internos.

Mientras tanto, la situación financiera del Estado heleno empieza a parecerse a la asfixia vivida hace un año, cuando Grecia suspendió un pago al FMI, y, según han confesado fuentes del Gobierno, en las arcas tan solo hay efectivo disponible hasta finales de mayo o principios de junio.

En junio, Grecia deberá afrontar un pago al FMI de unos 300 millones de euros, pero será en julio cuando la situación se pondrá especialmente delicada si hasta entonces Atenas no ha obtenido un nuevo tramo de ayuda del rescate -por valor de 5.400 millones de euros.

Entre obligaciones con el Banco Central Europeo y el FMI, Grecia deberá afrontar pagos por unos 2.700 millones de euros.

La portavoz del Gobierno griego, Olga Yerovasili, declaró que las previsiones macroeconómicas de la Comisión Europea para Grecia “justifican las políticas” del Ejecutivo que dirige Alexis Tsipras.

La Comisión ha revisado en tres décimas al alza sus previsiones de crecimiento para Grecia para este año, aunque el PIB se contraerá todavía un 0,3 % antes de volver a terreno positivo en la segunda mitad del año y acelerarse en 2017 hasta el 2,7 % del PIB, por “la renovada confianza” en los efectos de las reformas, según la propia CE.

El primer ministro griego, Alexis Tsipras, mantuvo una reunión con los responsables económicos de su gabinete para tratar la continuación de las negociaciones con los acreedores tras el parón de la Semana Santa ortodoxa. El Ejecutivo heleno espera cerrar los últimos flecos de cara a la primera revisión del tercer rescate al país.

El comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, reiteró que el 99 % de un primer bloque de reformas exigidas a Grecia para cerrar la primera revisión ha sido concluido, lo que incluye la reforma del sistema de pensiones, los créditos morosos, la introducción del fondo de privatizaciones o la creación de una agencia independiente de recaudación de impuestos. Una vez finalizada la primera revisión, habrá un debate formal sobre el alivio de la deuda griega.

La reforma de las pensiones ha provocado gran polémica y respuesta social entre la ciudadanía, ya que reducirá nuevamente el nivel adquisitivo de los jubilados, que ya han visto recortadas sus pensiones en los últimos años en una media de un 30 %.

Con esta reforma, el Estado pretende ahorrar 1.800 millones de euros anualmente (1 % del PIB), con el objetivo de hacer sostenible el sistema de la seguridad social griego.

Las protestas también se han dirigido contra el nuevo aumento de la presión fiscal que deberán afrontar los ciudadanos a cambio de que Grecia pueda recibir el aprobado de los acreedores. Grecia se ha comprometido frente a los acreedores a acometer hasta el año 2018 una serie de medidas presupuestarias por un total de 5.400 millones de euros, lo que equivale al 3 % del Producto Interior Bruto (PIB). De este total, 1.800 millones provienen de la reforma de la seguridad social, y el resto de la reforma del IRPF y de subidas de los impuestos indirectos.

A mediados de mes Grecia ha vivido la enésima huelga contra las reformas que desde hace seis años aplican los sucesivos Gobiernos a cambio de la ayuda internacional, y como viene siendo habitual, las movilizaciones tuvieron un impacto limitado en el quehacer cotidiano de este país. En esta ocasión, el paro de 24 horas no era en rigor una huelga general, sino solo del sector público, si bien se sumaron a él los medios de comunicación, los médicos privados, las ambulancias, los abogados y, por primera vez en años, los controladores aéreos. La participación de los controladores aéreos fue la diferencia más visible respecto a otras movilizaciones, pues la cancelación de prácticamente todos vuelos tuvo un impacto que trascendió las fronteras. La huelga había sido convocada en esta ocasión sólo por el sindicato del sector público, ADEDY.

Un caso concreto, en relación con la reforma de las pensiones es el de los periodistas. A finales de abril los medios de comunicación griegos realizaron una huelga contra la reforma de pensiones. La huelga finalizó el día 26, doce horas antes de lo previsto, pero la directiva del sindicato de periodistas Poesy acordó que todos los medios deberán incluir en sus páginas un largo reportaje sobre las consecuencias de la reforma para los trabajadores, y

las radios y televisiones deberán difundir un comunicado de este gremio. “Nos damos cuenta”, dijo Poesy en un comunicado, “de la necesidad de la sociedad de tener una información rápida y fiable en las circunstancias difíciles que viene los trabajadores, jubilados y desempleados, por lo que tras una reunión con todas las asociaciones de la movilización decidimos continuar la lucha por otros medios”.

La huelga comenzó el jueves 21 y estaba prevista inicialmente por 48 horas. El domingo, sin embargo, se inició una segunda etapa de tres días que debería haber concluido el miércoles 27 a las seis de la mañana (03.00 GMT).

Poesy exige el mantenimiento de su propia caja de pensiones suplementaria que, según la ley, se fusionará con las de los otros gremios. Además, exige la conservación de la tasa del 20 % impuesta a toda la publicidad en los medios, lo que junto a las cotizaciones de los periodistas es el segundo pilar de la financiación de sus cajas de pensiones y de su seguro de enfermedad. La supresión de este gravamen es una de las exigencias de los acreedores de Grecia.

Al final de la huelga, el Ministro de Trabajo, Yorgos Katrúgalos, mantuvo una reunión con representantes del sindicato y propietarios de los medios de comunicación, que concluyó sin acuerdo y en la que los periodistas le volvieron a plantear su exigencia de mantener esta tasa.

Según explicó Katrúgalos, durante la negociación con los acreedores, el Gobierno intentó salvar este gravamen, pero los acreedores, con una “insistencia teológica”, exigieron su eliminación.

Ni las patronales ni el Estado contribuyen a la caja de pensiones suplementarias de los periodistas. La reforma de las cajas de pensiones y de enfermedad de los periodistas está enmarcada dentro del borrador de ley presentado el viernes en el Parlamento que conlleva una profunda modificación del sistema de seguridad social griego.

En cuanto al tema de los refugiados, se da amplia reseña más adelante, en el apartado de migraciones; y en *Anexo Documental* se reproduce una publicación de la Subsecretaría General de Información y Comunicación del Gobierno griego, con datos sobre refugiados referidos al mes de abril de 2016.

